

Más y mejor financiamiento para la **EDUCACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA EN LA POSTPANDEMIA**



SAME 2021

POSICIONAMIENTO POLÍTICO

La UNESCO estima que el año próximo se recortarán por lo menos 210.000 millones de dólares de los presupuestos de educación simplemente debido a la disminución del Producto Interno Bruto (PIB) de los países, debido a la actual crisis sanitaria y económica.

Así, los sistemas educativos que ya han estado infradotados durante generaciones, en América Latina y el Caribe, podrían enfrentarse a su crisis de financiación más grave en los próximos tres años: la crisis histórica de financiación de la educación pública está quedando al descubierto y se ve exacerbada por la pandemia COVID-19.

La privatización como un problema central del financiamiento educativo

Entre los muchos rostros que tiene la privatización de la educación, están la introducción de principios del sector privado en los sistemas públicos educativos, tales como gerencialismo, meritocracia, competencia e incentivos de mercado.

La privatización en el sector educativo durante la pandemia tiene también el rostro del avance de las corporaciones tecnológicas con toda su oferta.

Es necesario conocer cómo actúan y cuál es la agenda de los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el BID, y qué paradigmas defienden para las políticas educativas de América Latina y el Caribe - sea a través del financiamiento directo de proyectos nacionales, sea por la producción y difusión de conocimiento y recursos técnicos para apoyo a las reformas de los sistemas de educación.

Instamos a las comunidades educativas, y a la sociedad civil de manera general, para que tomen consciencia de los efectos negativos de la privatización en la educación pública y para que estén vigilantes ante estos procesos.

Propuestas de enfrentamiento a los desafíos

La reducción o el cancelamiento del servicio de la deuda y la ampliación de los ingresos fiscales podrían transformar los recursos disponibles para la educación y otros derechos en los diferentes países.

El 97% de los ingresos para la educación se recauda a nivel nacional, lo que demanda reformas fiscales progresivas y el fin de la deuda y la austeridad.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional por la cancelación de la deuda y la modificación de las normas fiscales mundiales, poniendo fin a la obsesión por la austeridad que tanto ha perjudicado los sistemas educativos en todo el mundo.

La crisis de la pandemia COVID-19 podría marcar un punto de inflexión, con un compromiso renovado de los Estados en ampliar la financiación de la educación pública y gratuita.

Los países ricos, a su vez, deben desempeñar su papel revirtiendo la reciente disminución de la ayuda a la educación. Pero, esa ayuda no debe venir acompañada de condiciones impuestas por los países donantes.

Es necesario que la sociedad civil pueda influir y presionar por marcos normativos y políticas coherentes con el reconocimiento de la educación como un derecho humano y obligación social del Estado.

Demandamos la exclusividad de los recursos públicos para las escuelas públicas y gratuitas, así como la existencia de mecanismos de control de cualquier recurso público transferido a instituciones privadas.

Adelantarse a la privatización es luchar por la escuela pública, por un sistema educativo que utilice los recursos de forma congruente, con licitaciones apropiadas y ejecuciones transparentes.

El Estado debe ser el responsable de manejar el presupuesto público y ejecutar las políticas educativas, con amplia participación de la sociedad civil. Es fundamental el control de la sociedad civil, y especialmente de las comunidades educativas, sobre los presupuestos y contratos educativos.

La realidad de la pandemia COVID-19 nos plantea la necesidad de soberanía digital y la demanda de conectividad para todos y todas, desde un marco de protección a los derechos humanos, entre ellos la privacidad.

Avanzar en la alfabetización digital, la enseñanza por Internet como bien público, así como su uso desde un marco de protección de los derechos humanos, son agenda de la lucha por el derecho humano a la educación.

En el actual contexto de pandemia y desfinanciación de la educación pública, defendemos un financiamiento educativo público justo y adecuado, para garantizar una educación pública gratuita, emancipadora, para la justicia, equidad, coherencia, solidaridad, democracia y transformación social hacia un mundo más sostenible, sano, pacífico e igualitario.

Les invitamos a leer y compartir también el [llamado a la acción de la campaña “Mil Millones de Voces por la Educación”](#).